

Siete alcaldes han sido detenidos durante 2024: cinco permanecen encarcelados

La reciente detención del alcalde de Maracaibo, [Rafael Ramírez Colina](#), por funcionario del Sebin se suma a una creciente lista de acoso, persecución, órdenes judiciales y arrestos arbitrarios de autoridades locales opositoras desde el inicio de la campaña por las elecciones presidenciales venezolanas.

Durante este año se ha registrado la detención de siete alcaldes en todo el país. El primer arrestado fue Yhonny Lizcano (Ayacucho, estado Táchira) el pasado 20 de junio por presunta corrupción. Fue presentado ante el Tribunal 7 de Control de esa entidad por los presuntos delitos de «apropiación o distracción de bienes del patrimonio público, retraso u omisión intencional de funciones». Se encuentra recluido en el DAET San Cristóbal.

De este grupo se han registrado dos excarcelaciones: José Mosquera Adarme (Lagunillas, estado Zulia), quien pertenece al partido Un Nuevo Tiempo y estuvo seis días detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas; y José Leocadio Carrillo (Urdaneta, estado Trujillo), quien es militante de Voluntad Popular y fue liberado el día después de su arresto.

Otros dos alcaldes tienen órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas. Se tratan de Franco Gerratana, quien fue destituido como alcalde de Ortiz (Guárico) el pasado 15 de julio y está solicitado por los supuestos delitos de «distracción o apropiación del patrimonio público, ventaja o beneficio económico de funcionario público y asociación; y Rigoberto Ovallos (municipio Antonio Rómulo Costa, Táchira), quien huyó del país luego de ser acusado de los presuntos delitos de «peculado doloso propio y evasión de licitación».

También al alcalde Jóbito Villegas (municipio Sucre, Portuguesa) intentaron detenerlo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a principios de agosto. Se desconoce si existe una orden de captura en su caso.

Mientras que el alcalde del municipio Torres (estado Lara), fue hostigado y perseguido —al igual que su familia— luego de ser acusado por el chavismo de ser el responsable de los ataques a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en

Carora durante las manifestaciones contra los resultados de las presidenciales.

Oropeza pasó a la clandestinidad y designó como alcaldesa encargada a Iraima Timaure el lunes 12 de agosto, mediante la resolución N° A-016A-292. Cinco días después, el Concejo Municipal –de mayoría oficialista– sesionó y declaró su ausencia absoluta sin haber transcurrido los 90 días que establece la Ley. Los concejales designaron y juramentaron a Lasmit Verde (PSUV) como nueva alcaldesa hasta el término del periodo.

En los casos de Jordan Sifuentes (Mejía, estado Sucre) y Fernando Feo (Tinaquillo, estado Cojedes) se desconoce dónde se encuentran detenidos o los cargos de los que se les acusan.

Antes del arresto el 1 de octubre de Ramírez Colina, quien pertenece a Primero Justicia y se encontraría en la [sede del Sebin Maracaibo](#), se produjo la detención de Abraham Hayón (municipio Rangel, Mérida).

Hayón fue [detenido el 4 de septiembre](#) por funcionarios del Sebin, tras unas declaraciones en las que llama a una «intervención humanitaria» por parte de Estados Unidos. El funcionario fue destituido por el Concejo Municipal de Rangel el pasado 19 de septiembre de 2023 por su «falta absoluta», pero restituido por vía judicial el 31 de octubre.

Este año también han sido inhabilitados por Contraloría 12 alcaldes en los estados Miranda, Trujillo y Nueva Esparta. Además, están pendientes las elecciones en siete municipios, según Acceso a la Justicia, para suplir las faltas de sus alcaldes.

Con información de TalCual